

Pueblos originarios: Reclamos territoriales

El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reformada en 1994 reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”. En consecuencia, reconoce que la República Argentina no se fundó sobre un espacio vacío, sino sobre un territorio habitado por pueblos desde tiempos inmemoriales.

Las estrategias de relación con esas comunidades han sido históricamente las mismas hasta mediados del siglo XX: pactos de paz, operaciones de guerra e inclusión forzosa de las poblaciones nativas bajo una posición subordinada en las sociedades regionales donde se localizaban. En todos estos casos, estuvo presente la cuestión del reclamo territorial, ya fuese acordando el cese de hostilidades y habilitando los permisos de pasaje (los pactos de paz), incorporando por la fuerza los territorios conquistados, sometiendo a los pueblos a regímenes de servidumbre o de expulsión, o bien cediendo parcelas del territorio en calidad de permisos, arriendos o reservas.

Con respecto a los reconocimientos territoriales, existen antecedentes muy antiguos: para sustentar sus reclamos, por ejemplo, la comunidad diaguita de Amaicha del Valle esgrime la Cédula Real de 1716, en la que se reconocía la posesión comunitaria de sus tierras liberando a sus miembros de obligaciones tales como encomiendas o tributos. En el caso de los pueblos atacameños y kollas, sus peticiones tuvieron expresión colectiva en el Malón de la Paz de 1946, pero debieron esperar varios años antes de que el Congreso de la Nación accediera parcialmente a lo que solicitaban.

En la actualidad, dos son los problemas que encuadran estas demandas. Por un lado, los proyectos privados o públicos sobre sus territorios: el monocultivo extensivo, la explotación minera, el turismo internacional y las obras de infraestructura de diversa escala con financiación externa (camino, represas, puentes, etc.). Por otro lado, la legislación nacional, su reglamentación y la doctrina jurídica, que no hace lugar o entorpece el reconocimiento de los derechos a los que apelan los pueblos originarios.

Entre ambos conflictos, que operan como un juego de pinzas en la descaracterización de los históricos derechos a la tierra de estos pueblos, se esconden otros factores indeseables y poco visibles: el corrimiento de cercos, la invasión sobre los sembrados y las aldeas, la destrucción solapada de sus recursos naturales, la contaminación de sus aguas, el uso indebido de la fuerza pública para ordenar desalojos, y la demora en las tramitaciones judiciales.

Asesora: Ana María Gorosito Kramer
<http://pueblosoriginarios.encuentro.gov.ar>